

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de febrero del año 2026. Reunidos en Acuerdo la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, DE MINERÍA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA de la Tercera Circunscripción Judicial, el Dr. Federico Emiliano CORSIGLIA, la Dra. María Marcela PÁJARO, y el Dr. Emilio RIAT, después de haberse impuesto individualmente de esta causa caratulada "**MAGGI, DAMIAN ISMAEL C/ QUINTANA, JOSE DANIEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)**" **BA-30780-C-0000**, y discutir la temática del fallo por dictar, con la presencia del señor Secretario Dr. Alfredo Javier ROMANELLI ESPIL, emiten sus votos en el orden establecido en el sorteo practicado respecto de la siguiente cuestión por resolver: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la cuestión planteada, el Dr. CORSIGLIA dijo:

I. Corresponde resolver la apelación interpuesta por la parte actora el 13/03/2025 (presentación E0097), respecto de la sentencia definitiva de fecha 05/03/2025 y su aclaratoria de fecha 06/05/2025, concedida libremente y con efecto suspensivo (providencia del 19-03-2025), fundada el 05/08/2025 (presentación E0105) y sustanciada, mereció la respuesta de la demandada el 24/08/2025 (presentación E0106). La apelación deducida y fundada por la letrada patrocinante de la demandada el 16/03/2025 (presentación E0098) por los honorarios profesionales que le regularan en la sentencia de fecha 05/03/2025, concedida en los términos del art. 222 del CPCC., se la tiene por fundada y se sustancia mediante providencia de fecha 19/03/2025, traslado que fue incontestado. Y la apelación deducida por la parte actora el 19/05/2025 (presentación E0102) por los honorarios profesionales que le regularan en la sentencia aclaratoria de fecha 06/05/2025 al perito Aldo Capitán, concedida en los términos del art. 222 del CPCC., mediante providencia de fecha 27/05/2025.

II. Antecedentes del caso.

El Sr. Damián Ismael Maggi en fecha 30/11/2021, interpuso demanda de daños y perjuicios, sufridos por el actor en su persona y patrimonio, contra José Daniel Quintana y Gustavo Horacio Aloí, quienes ejercen su actividad comercial de reparación de embarcaciones bajo la denominación ALTO ALUMINE Sociedad de Hecho, por las

fallas provenientes de un deficiente trabajo de reparación realizado por los demandados en la embarcación tipo semirrígido denominado Olympus y registrada en el R.E.Y. 034081, que ocasionó el hundimiento de la misma y el peligro que vivieron sus ocupantes al momento de ocurrir el hecho, por la suma de pesos cuatro millones un mil ciento setenta y ocho (\$ 4.001.178), que surge de los rubros daño emergente, daño moral y daño punitivo (ley 24.240), todo ello con más sus intereses, costos y costas, o lo que en más o menos resulte de la prueba a colectarse en autos.

Formulan la aclaración de que la demanda es dirigida a los socios en forma personal dado que la sociedad indicada es de carácter irregular y por ende carece del estatus de sujeto de derecho.

Impuesto que fuera el trámite ordinario, en fecha 16/02/2022 José Daniel Quintana, contestó demanda opuso la excepción de falta de legitimación activa por una porción del reclamo (cuyo tratamiento fue diferido por no ser manifiesta el 31/03/2022) y excepción de defecto legal (la que fue rechazada en fecha 31/03/2022); impugnó los rubros indemnizatorios y ofreció prueba. En fecha 30/06/2023 contestó demanda el Sr. Gustavo Horacio Aloí, quien reprodujo el planteo efectuado por el co-demandado Quintana.

En fecha 30/08/2022 éste Tribunal confirmó la resolución de fecha 31/03/2022 que rechazó la excepción de defecto legal y confirmó el diferimiento de la excepción de falta de legitimación activa articulada por los demandados.

El Juez de primera instancia dictó sentencias definitiva y aclaratoria con fechas 05 de marzo de 2025 y 06 de mayo de 2025, respectivamente, por las que en lo que a los recursos interesa dispuso: Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por los demandados en cuanto al reclamo de las facturas acompañadas; rechazó la demanda interpuesta; impuso las costas al actor atento el resultado del proceso y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes (letrados y peritos).

Para así resolver, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados, consideró que el pago de la factura en concepto de arreglo de la embarcación fue efectuado por una persona distinta al actor; es decir las facturas están a nombre de Nueva Primavera SRL y en estas actuaciones el accionante es Damián Maggi, quien reclamó los daños y perjuicios sufridos en su persona y patrimonio. El sentenciante entendió que el actor no es titular de la relación jurídica sustancial por los

arreglos de la embarcación que sustenta la pretensión, atento que no existe identidad entre quién pago los arreglos y quién reclamó el reembolso de los mismos. Si bien el actor es titular del 90% de la sociedad a cuyo nombre se encuentran las facturas de pago no está legitimado para peticionar el reintegro mencionado, porque la sociedad es una persona distinta de los socios que la integran independientemente del porcentaje que cada uno de éstos tenga respecto de las acciones de aquélla.

En lo atinente a la responsabilidad por el suceso materia de litigio, el a quo dispuso rechazar la demanda, porque entendió que en estos actuados no existe elemento probatorio alguno que demuestre en forma precisa cual fue la causa que generó el hundimiento de la embarcación y además la reparación no fue efectuada porque el actor, luego de alertar al co-demandado Quintana de la misma, en ningún momento puso la embarcación a disposición de los demandados a tal fin.

III. Expresión de agravios de la apelante (actora).

Los letrados apoderados de la actora recurrente, mediante presentación de fecha 05-08-2025 (E0105), solicitan se revoque la sentencia recurrida, se haga lugar a la demanda en todos sus términos, con costas a la demandada y sostienen reserva del caso federal.

La recurrente expresa que la sentencia de primera instancia es arbitraria, incongruente y absurda. Que ignora o desvirtúa prueba fundamental producida, como los testimonios de Carlos Andrés Cimadevila y Esteban Persano, quienes fueron contestes en la narración de los hechos, el desprendimiento del tubo y las consecuencias del hundimiento.

Que el a quo descalifica el testimonio de Persano basándose en una supuesta contradicción con la titularidad registral de la embarcación, sin considerar que el propio actor en su demanda explicó la cesión de la parte de Cimadevila a Maggi por problemas económicos, y que Cimadevila dio su conformidad a la acción.

Agrega que el a quo consideró que el informe pericial no es concluyente sobre la causa del hundimiento, al señalar que el ingreso de agua por el despegue de los pontones fue "potencial" y no "exclusivo". Sin embargo, el perito Ing. Brunori fue claro al indicar que "la embarcación no tenía averías por donde se ingresara agua a bordo, y que la entrada del líquido se produjo por el desprendimiento del tubo o pontón" y que

"el desprendimiento del pontón fue por un trabajo deficiente en el proceso del pegado".

Afirma que la sentencia se basa en un supuesto "incumplimiento del deber de colaboración" del actor al no llevar la embarcación para su revisión, a pesar de que los mensajes de WhatsApp aportados por la propia demandada demuestran que Cimadevila informó del problema y Quintana se puso a disposición, pero luego Cimadevila se encontraba de viaje. Que al atribuir la responsabilidad al actor por no llevar la embarcación, ignora el contexto y la conducta de las partes, así como la complejidad de la situación. Y que al desestimar la demanda sin una valoración adecuada de la prueba y sin considerar los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, la sentencia vulnera el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, garantías de raigambre constitucional.

Aduce que el sentenciante yerra al afirmar que no se probó la relación de causalidad entre el trabajo defectuoso y el hundimiento. El informe pericial, si bien utiliza términos como "pudo haber sido", es claro en sus conclusiones al señalar que la entrada de agua se produjo por el desprendimiento del tubo debido a un trabajo deficiente en el pegado. La relación de causalidad no exige una certeza absoluta, sino una probabilidad calificada que permita imputar el daño a la conducta del demandado.

En cuanto a la recepción de la excepción de falta de legitimación activa, entiende que este razonamiento es formalista y desatiende la realidad económica y la finalidad protectoria de la Ley de Defensa del Consumidor.

Además sostiene que al rechazar la sentencia la totalidad de los rubros indemnizatorios, incurre en un grave error e indica sus razones.

Finalmente señala que la sentencia es incongruente y absurda al atribuir la responsabilidad del siniestro al "hecho del damnificado" (Sr. Maggi) y al "hecho de un tercero" (Sr. Cimadevila), basándose en un supuesto exceso de pasajeros y un motor distinto al autorizado, así como en la falta de puesta a disposición de la embarcación para su reparación. Que si bien la "Constancia autorización para navegar" indica un máximo de siete personas, la responsabilidad por el hundimiento no puede atribuirse a este hecho sin una prueba concluyente de que fue la causa eficiente del daño. La pericia técnica no vincula el número de pasajeros con el despegue del tubo. Además, la existencia de un motor distinto no fue probada como causa del hundimiento. Y que en este caso, la causa principal del daño fue el trabajo defectuoso de los demandados,

como lo sugiere la pericia. Que la supuesta omisión de llevar la embarcación a reparar no puede eximir de responsabilidad a quienes realizaron un trabajo deficiente que puso en riesgo la vida de diez personas.

IV. Contestación de los agravios.

A su turno la demandada, en fecha 24/08/2025 (presentación 0106), solicita se rechace el recurso de apelación del actor, con costas. Y para el caso que se haga lugar al recurso de apelación, formula reserva de recurso extraordinario.

Afirma que no surge de los considerándoos de la sentencia que el juez hubiera descalificado el testimonio de Persano, ni el supuesto motivo que indica el agraviado. Por el contrario, supone que del testimonio de los Sres. Cimadevilla y Persano, el juez dio por probado, que se habría despegado el tubo y que la embarcación se habría hundido. Y agrega que expresa “que supone”, porque no hay prueba alguna de que la embarcación se hubiere hundido, a no ser de la declaración de Cimadevilla y Persano. Además, que de la declaración del testigo propuesto por el actor, Sr. Mario Antonio del Maestro, surge que la embarcación no se hundió, ni quedó sumergida parte alguna.

Destacó que el actor no acompañó imagen alguna, sea foto o filmación, de la embarcación mientras navegaba el 22-1-2020, embarcando agua por la supuesta filtración, ni hundida, ni encallada, ni imágenes anteriores al reflote, ni imágenes del procedimiento de reflote, por lo que no hay registro alguno al respecto, ni del estado de la embarcación, ni de la ocurrencia del hecho y del hundimiento, ni del reflote, ni de los daños.

Aduce que el testigo Curual dijo que no vio la embarcación ni antes ni después del reflote, y que no intervino Prefectura en el reflote. Dijo que sólo asesoró al Sr. Cimadevilla en sede de Prefectura, en calle Elordi, acerca de los requisitos para el reflote. Que no hay constancia en autos de que dicha presentación de plan de reflote haya sido tramitada y aprobada por Prefectura Naval Argentina ni se lo preguntaron los abogados del Sr. Maggi al Sr. Lena ni al Sr. Curual. Y en la demanda, sólo manifestó que se esperó al día 25-1-2024 por la inclemencia climática. Por lo que los daños que pudieron ser producidos durante el supuesto reflote que fue antirreglamentario, sólo podrían ser atribuidos al Sr. Lena. Que el informe del Sr. Lena también contradice al Sr. Bergant, quien informó que la embarcación ya había sido reparada en varias oportunidades al dueño anterior (Puelo), mientras que el Sr. Lena dijo que nunca antes

había sido reparada por su náutica. Por su parte, el testigo Bergant, que a la fecha del siniestro trabajaba como monotributista para el Sr. Lena en la náutica de éste, reparando cascos y pegando tubos, expuso que conocía a la embarcación desde antes, del dueño anterior (Puelo), que era una embarcación vieja a la que ya le había hecho varias reparaciones, y que la próxima le había aconsejado al dueño anterior, era el cambio de tubos y que éste no lo hizo allí. El Sr. Bergant declaró que él no intervino en el reflote, por lo que no hay al respecto, prueba acerca del estado de la embarcación y su motor a ese momento y que consideraba que la tela del tubo era incompatible con el casco, pero que si se limpia bien el casco se usa y que el 90% de los astilleros que hay en la Argentina usan PVC. Que él no puede decir que el casco no estuviera bien limpio.

Agrega que el testigo del actor, Sr. Persano, quien reconoció ser muy amigo del Sr. Maggi, declaró solamente que el tubo se despegó unos dos metros en la parte derecha. No señala ningún otro daño en la embarcación. También declaró que la embarcación era propiedad del Sr. Maggi, y explica que lo sabe “porque el certificado estaba en la embarcación”. Esta declaración falta a la verdad, porque es prueba documental de la actora que en el certificado de navegación vigente al 22-1-2020, el 100% de la titularidad de la embarcación es del Sr. Carlos Cimadevilla.

Afirma que la pericia mecánica, carece de valor probatorio en relación a los daños sufridos por la embarcación y la causa de los mismos. Que la misma está realizada en base a las fotos acompañadas por el actor, que fueron tomadas en oportunidad de la constatación notarial en la náutica del Sr. Lena, en julio de 2020, no en el lugar del hecho y antes de su reflote (22 enero de 2020). Que los demandados no participaron del acto de constatación notarial realizado el 14-7-2020, sobre la embarcación situada en la náutica del Sr. Claudio Arón Lena. Ello porque dicha constatación notarial, no se propuso ni se hizo sobre la embarcación ubicada en el lugar del presunto hundimiento y/o durante el acto de reflote y rescate de la misma para verificar en ese entonces los daños existentes. Se propuso e hizo en el mes de julio de 2020, casi seis meses después del 22-1-2020, en la náutica, que ahora resulta ser la misma que facturó la reparación de daños y cuyo titular es ofrecido como testigo de reconocimiento y perito de parte. El mismo perito que trabajó sobre las fotos de la constatación, dijo que la nave estaba cargada de nieve por ni siquiera tener la lona protectora. Si los codemandados hubieran participado del acto, podría haberse interpretado como consensuar que los daños existentes al 14-7-2021, en la náutica, fueron los mismos que los presuntamente

sufridos al 22-1-2020 y/o por el presunto reflote del 26-1-2020, cuando no hay prueba de nada de ello.

Agrega que la misma pericia informó que supone, pero no puede afirmar que hubiera un error en el procedimiento de pegado que se tradujera en un problema de la preparación de la superficie o que fuera por falta de calor necesario para activar el adhesivo, o que el mismo fuera inadecuado para el material porque no se realizó un análisis físico químico de los restos en el casco antes de que se realizara su limpieza y posterior reparación. El abanico de causas que informa el perito, son suposiciones de las cuales no afirma ninguna, por lo que carece de valor probatorio. El resto de los daños que describe que sostiene que fueron producidos por el hundimiento de la embarcación, también lo está suponiendo desde el relato del actor y en base a fotos. De allí que no sea “sesgada” la interpretación de la pericia por el Juez.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa, sostiene que el actor en la demanda, expresa: “Pero también debe tenerse en cuenta que los trabajos de reparación a los demandados fueron contratados por Nueva Primavera S.R.L. que es propiedad del actor”. Que a su vez el actor acompañó a la demanda Escritura 64 del 03-3- 2020, acta de cesión de cuotas, designación de gerente y reforma de contrato social de Nueva Primavera S.R.L.. De la escritura, surque que son socios de Nueva Primavera SRL, el Sr. Damián Ismael Maggi con 45.000 cuotas de \$ 1 cada una y la Sra. Stella Maris Pagano con 5.000 cuotas de \$ 1 cada una, ambos con calidad de socios gerentes. Queda claro entonces, que Nueva Primavera SRL. no es de “propiedad del actor”.

Sostiene que el planteo de la accionante es improcedente. A la fecha de la interposición de la demanda, el Sr. Maggi no sufrió perjuicio por daños a la embarcación ni por el valor de su reparación, atento ellos ya fueron reparados y abonada la reparación por Nueva Primavera SRL. y el Sr. Maggi no informó en la demanda ni probó durante el juicio repetición del Sr. Maggi a Nueva Primavera SRL. del monto por ella abonado. Hacer lugar a la pretensión del Sr. Maggi, basado en que Nueva Primavera SRL “es suya” y que fue facturado sólo a los efectos fiscales, es contrario a la ley y expone a los demandados a que Nueva Primavera SRL. pudiera reclamarles lo abonado, por el principio “el que paga mal, paga dos veces”, además es socia gerente la Sra. Pagano, quien pudiera accionar, conforme el acta. Es decir, revocar la falta de legitimación pasiva, no sólo es contrario a las garantías de igualdad ante la ley, debido

proceso, sino que es un abuso de derecho y genera inseguridad jurídica.

Respecto a los rubros indemnizatorios reclamados, afirma que se probó a través del testimonio del Sr. Cimadevilla y del Sr. Persano, que ni el Sr. Maggi ni su madre estaban en la embarcación el 22-1-2020, día del siniestro. Y el Sr. Persano dijo que los artículos personales perdidos eran propios de él, del testigo Persano. Por lo que el Sr. Maggi no tiene acción, derecho para reclamar indemnización por artículo personal alguno, ya que tampoco lo estaría haciendo por repetición de pago al Sr. Persano, lo que no demandó y menos probó.

En cuanto al daño moral aduce que los codemandados probaron que ni el Sr. Maggi ni sus familiares estaban embarcados, que él propietario de la embarcación al momento del supuesto siniestro era el Sr. Cimadevilla, por lo que no pudo el Sr. Maggi, perder “su” embarcación. Que la responsabilidad del accidente es del Sr. Carlos Andrés Cimadevilla, que en contra de las normas del REGINAVE transcriptas en las contestaciones de demanda, conociendo un supuesto despegue del tubo respecto del casco ya en el mes de diciembre, sin repararlo previamente, salió a navegar el 22-1-2020, desde Bahía López hasta el fondo del brazo Blest y vuelta a Bahía López, embarcando un total de 10 personas, 3 más de las permitidas conforme documentación de prefectura, con el peso consiguiente, más pertenencias personales y equipos, con un motor distinto del habilitado por Prefectura para la embarcación, acelerando así el despegue de los tubos y el resultado que reclaman pero no prueban.

Agrega en relación al daño punitivo, entre otras consideraciones, que en principio el Sr. Maggi, tanto al momento de la contratación del trabajo (febrero de 2019) como a la fecha del presunto siniestro 22-1-2020, carecía de legitimación activa para reclamo alguno. Que la constancia de autorización para navegar, transferencia de matrícula en trámite, está fechada 04-10-21, y hasta esa fecha, el titular del 100% de la embarcación era el Sr. Cimadevilla, conforme “Certificado de Matrícula expedida en fecha 08-11-13 por Prefectura Naval Argentina, donde dice Propietario: Carlos Andrés Cimadevilla”.

V. Apelación de honorarios:

1. En presentación E0098 de fecha 16/03/2025; la Dra. Silvina Cohen Arazi, por su propio derecho, apela y funda, la regulación de honorarios de la sentencia de fecha 05/03/2025, por su labor profesional como letrada patrocinante de los demandados.

Solicita se haga lugar a la apelación, dejando sin efecto la regulación apelada, y se ordene regular el 20% del monto base integrado por capital de demanda, más interés corrido desde el inicio de la demanda hasta la sentencia, sin perjuicio de los intereses que corran hasta el efectivo pago.

Sostiene que la regulación de honorarios recurrida no aplica la doctrina establecida por el Superior Tribunal de Justicia en "REBATTINI, RODOLFO ANIBAL C/ RITTER, HUBERT OTTO Y OTRA S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ORDINARIO) S/CASACION" (Expte. N° BA-10155-C-0000), SECRETARÍA CIVIL STJ N°1, 56 - 12/06/2024 – DEFINITIVA; Que en este fallo, el STJ cambia la doctrina del fallo "MORETE" y establece que, en casos de rechazo total de demanda, el monto base de la regulación de honorarios, debe integrarse por el capital más el interés cuando éste hubiere sido peticionado por el actor en la demanda, desde la promoción de la demanda hasta la fecha de la regulación de honorarios. El error en la regulación hoy recurrida es que el monto base sólo lo integra el capital de demanda, \$ 4.001.178, y a su entender el monto base correcto para este caso -que se rechazó la demanda-, debe integrarse por el capital más el interés, porque el actor, también demandó el interés del capital.

Asimismo apela el porcentaje del 18%, aplicado al monto base, por bajo y se disponga el porcentaje del 20%. La regulación sólo enumera los arts. 6 y 8 a su respecto, pero omite lo ordenado en el art. 7, todos de la Ley de Aranceles. Al respecto, el Artículo 7 LA, expone que la sentencia que regule honorarios, deberá contener la merituación de las pautas fijadas en el artículo anterior bajo pena de nulidad. La mera enumeración del art. 6 y 8 de la LA en la sentencia no constituye merituación de su actuación profesional, por lo tanto se incurre nuevamente en violación del art. 200 de la Constitución Provincial, siendo entonces nula la regulación.

2. La apelación de la parte actora de fecha 19/05/2025 (presentación E0102) por los honorarios profesionales que le regularan en la sentencia aclaratoria de fecha 06/05/2025 al perito Aldo Capitán, concedida en los términos del art. 222 del CPCC., mediante providencia de fecha 27/05/2025, por considerarlos altos y por ende causarle gravamen irreparable.

VI. Análisis y solución del caso.

VI.1. Por una cuestión metodológica corresponde tratar en primer término la

apelación deducida por la actora en fecha 13/03/2025 (presentación E0097) mediante la cual solicita se revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda con costas a los accionados, y con posterioridad la apelación atinente a la responsabilidad por el suceso que motiva estos actuados y los rubros indemnizatorios reclamados.

VI.1.1. Apelación interpuesta por la accionante respecto al acogimiento de la excepción de falta de legitimación activa para reclamar el rubro daños materiales.

Para principiar cabe recordar que hay falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son las “personas habilitadas por la ley” para asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso. La falta de legitimación se advierte si no media “coincidencia” entre quienes actúan en juicio y aquellos habilitados especialmente por la ley para pretender o contradecir respecto de la materia en litigio (CNCiv. Sala “J” in re “Rohr, Fabiana c/ Di Donato, Roxana y otro s/ Daños y Perjuicios”, Expte. N° 71035/2008, del 20/9/2019; ídem, “Luque, Myriam Mónica y otro c/ Delgadillo, Mabel y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 20.349/2.012, del 21/9/2018, entre muchos otros).

La sentencia constituye una unidad lógico jurídica, por lo que la legitimación sustancial de las partes (activa y pasiva) importa un presupuesto preliminar y necesario para la declaración del derecho, y en caso de no resultar manifiesta su examen se impone al momento del dictado de la sentencia definitiva, incluso cuando no haya sido opuesta como defensa, lo que resulta un deber del juez (Cf. Fenochietto, Carlos, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado..., Ed. Astrea, t. I, Pág.587).

Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la falta de legitimación sustancial se configura cuando alguna de las partes no es el titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento (Conf. CSJN, 29/06/2004, Lexis N° 4/52434), como así también cuando el actor carece de interés jurídicamente tutelable (Conf. CSJN, 01/09/2003, Lexis N° 4/49375).

El proceso debe desarrollarse respecto de sujetos que puedan ser útilmente los destinatarios de los efectos del mismo y, por consiguiente, de la tutela jurisdiccional. La aptitud para demandar y para contradecir coincide con la titularidad del derecho subjetivo sustancial y con el carácter de sujeto pasivo de esa relación sustancial. Cuando se controvierte en juicio sobre una relación de derecho privado, la legitimación para

obrar y para contradecir corresponde, respectivamente, al sujeto activo y al sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida. La defensa de falta de legitimación para obrar en el actor -activa- o en el demandado -pasiva-, se identifica con la tradicionalmente denominada "falta de acción" (*sine actione agit*). Por ello, la legitimación para obrar, como condición esencial de admisibilidad de la acción que es, puede y debe ser verificada, incluso de oficio, por el juzgador, aun mediando conformidad de partes por tratarse de un defecto sustancial de la pretensión.

Ahora bien, en estos actuados las facturas presentadas por la actora en el Sistema SEON con fecha 30/11/2021 referidas a los arreglos efectuados al semirígido Olympus están a nombre de Nueva Primavera SRL., que es quien ha efectuado el pago de las mismas y el accionante en autos es el Sr. Damián Maggi, quien reclamó los daños y perjuicios sufridos en su persona y patrimonio.

El actor, Sr. Maggi sostiene que los reclamos sobre los trabajos de reparación a los demandados fueron contratados por Nueva Primavera SRL. que es de su propiedad.

Efectivamente el accionante acompañó a la demanda Escritura N° 64 de la cual surge que son socios de Nueva Primavera SRL., el Sr. Damián Ismael Maggi con 45.000 cuotas de \$ 1 cada una y la Sra. Stella Maris Pagano con 5.000 cuotas de \$ 1 cada una, ambos con calidad de socios gerentes.

En este escenario, no advierto que la crítica propuesta sobre el punto tenga elementos que desacrediten lo decidido, de hecho coincido con el sentenciante ya que en el caso en examen no media identidad entre quien pagó los arreglos y quien solicitó su reembolso. Si bien el Sr. Maggi es titular del 90% de las acciones de la sociedad a nombre de quién se emitieron las facturas de pago, no se encuentra legitimado para peticionar el reintegro del dinero allí mencionado, dado que la sociedad es una persona distinta de los socios que la integran.

En virtud de lo expresado, corresponde rechazar el agravio expuesto por la recurrente y confirmar la sentencia de primera instancia en este punto.

VI.1.2. Apelación atinente a la responsabilidad por el suceso que motiva estos actuados y los rubros indemnizatorios reclamados.

Para principiar cabe individualizar que los agravios de la recurrente en este punto hacen hincapié en la omisión y valoración errónea de la prueba por parte del

sentenciante, esencialmente en referencia a la prueba testimonial y la pericial técnica.

En este escenario, tal como se describiera, la recurrente manifiesta que el hundimiento se produjo por el defectuoso trabajo realizado por los demandados, y éstos parten primero por negar el hundimiento (en tanto sostienen que no existe prueba alguna del supuesto hundimiento), para luego afirmar que ellos fueron puestos en conocimiento de que la embarcación presentaba una falla (conforme la comunicación vía mensaje telefónico), y que luego no la llevaron a hacer el arreglo pertinente, y que además existió un exceso de pasajeros a bordo (diez) según la constancia de autorización para navegar expedida por Prefectura Naval cuya cantidad máxima permitida es de 7 personas a bordo.

Ahora bien, en punto a la evaluación de los testigos en crisis, lo cierto es que efectivamente el a quo tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales y no se advierte una arbitrariedad en su evaluación, más allá de que hubiera sido deseable un mayor análisis de los restantes testimonios; en efecto, puntualmente los testimonios de los Sres. Cimadevila y Persano deben ser sopesados con otros testimonios obrantes en la causa, como los del Sr. Del Mastro y el Sr. Bergant. Y de ello resulta válida y razonable la conclusión a la que se arriba en la sentencia, en orden a establecer que no se encuentra acreditada la causa de hundimiento de la embarcación.

Para más, a poco que se analicen en forma integral la totalidad de los elementos de prueba obrantes en la causa, se advierte que tampoco se encontraría acreditado el citado hundimiento; así, de las pruebas producidas el elemento más contundente a tal fin resulta tal vez el informe producido por el Sr. Claudio Lena, de fecha 10-03-2020, el que se da por reproducido para una mayor celeridad.

El mismo da cuenta del rescate de la embarcación en cuestión, el cual le había sido encomendado, y luego la descripción de cómo se desarrolló el mismo. Sin embargo llama la atención que el informe no cuente con ninguna imagen del lugar en el cual se encontró a la embarcación, del estado de la misma en esa oportunidad, o del procedimiento de reflote, ni ningún otro aporte fílmico o fotográfico que permita recrear la escena, lo que claramente hubiera despejado toda duda al respecto. Tampoco ha sido aportada en este sentido ninguna imagen o registro fílmico, ni en el informe, ni como prueba documental por parte de los actores, que son quienes tenían en ese sentido la carga procesal a su cargo.

Pero además, existe el testimonio del Sr. Curual, jefe de operaciones de la Prefectura Naval Argentina, quien dio cuenta del procedimiento administrativo de reflote, que debe ser previamente autorizado por el organismo al que pertenece, y que en este caso da cuenta de que no intervino Prefectura Naval.

Es decir que, aun en el mejor de los casos y suponiendo por hipótesis que el reflote se hubiese efectuado, tal la posición de la recurrente, el mismo habría sido por lo menos irregular, en tanto no contaba con los permisos administrativos pertinentes.

Por último no puede dejar de señalarse que el Sr. Lena, no solo realizó el informe –incompleto tal como se señalara-, sino que además fue citado como testigo y fue también quien, con posterioridad, reparó la embarcación (cf. Facturas emitidas a nombre de Nueva Primavera SRL Números 00000221; 00000231 y 00000232, obrante como documental), lo cual de por sí puede no resultar incompatible, pero sin dudas habilita el contraste de todos los elementos de prueba, que abonan la razonabilidad del decisorio recurrido.

Luego queda por abordar el tema vinculado con la pericial técnica, cuya interpretación por parte del a quo ha sido criticada.

Aquí cabe comenzar por señalar como un dato esencial para su valoración, que conforme surge de la pericia mecánica efectuada por el Ing. Nicolás Roberto Brunori, la misma fue realizada en base a las fotos presentadas en el expediente, dado que la embarcación no se encontraba en ésta Jurisdicción.

Pero además las mencionadas fotografías son las que oportunamente tomara el actor en el momento de realizarse la constatación notarial que ha sido acompañada a las actuaciones, y no fotografías del momento posterior inmediato al supuesto hundimiento y/o su reflote. De modo que el valor probatorio de la pericia debe ser ponderado en ese contexto y con tales limitaciones, que claramente podrá servir como un elemento más de convicción del sentenciante, pero unido o concatenado con otros medios de prueba.

En este sentido, cabe recordar que la prueba en cuestión se incluye dentro de la denominada prueba científica, la que goza de un alto poder de fiabilidad. Y, la ponderación que efectúa el magistrado del informe de peritos se realiza conforme a las reglas de la sana crítica, sin que por la circunstancia antes indicada esta prueba deba prevalecer sobre el resto de las pruebas producidas o agregadas al proceso, debiendo

valorarse la misma en su conjunto.

En este sentido el Profesor Hitters, sostiene que “ (...) así como la aceptación de las conclusiones no supone la declinación de sus facultades, el apartamiento del juez frente al dictamen pericial no es más que otra alternativa legal autorizada por el art. 474 CPCCBA; y del mismo modo así como el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio, pues ello convertirá al perito-auxiliar del juez –en autoridad decisoria dentro del proceso, la obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el ejercicio de su sola voluntad, constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de ponderación de la prueba” (Hitters, SCBA, Ac 71624 15-3-2000).

En este contexto, tenemos que el informe pericial establece que los pontones se despegaron masivamente de sus soportes y que el motivo pudo haber sido un error en el procedimiento de pegado, que se traduce a un problema en la preparación de la superficie (ya sea por una limpieza insuficiente o un lijado inadecuado), como también una falta de calor necesario para activar el adhesivo, o que el mismo adhesivo pudo ser el inadecuado para el material entre otros motivos. Y, el propio experto agregó que para verificar estos motivos, es necesario realizar un análisis físico químico de los restos en el casco antes de que se realizara su limpieza y posterior reparación, lo que no sucedió.

En definitiva se advierte que, tanto el informe pericial realizado en estos actuados como así también las declaraciones testimoniales recepcionadas no permiten arribar a una conclusión clara respecto del hundimiento de la embarcación, y menos aún de su causal.

Así la actividad probatoria producida en el presente expediente resulta palmariamente insuficiente y fragmentaria para dar por acreditados los hechos invocados por la recurrente, careciendo de la fuerza de convicción necesaria.

Cabe aquí mencionar una regla procesal básica que consiste en que, en principio, es la parte actora quien tiene la carga de probar los hechos en que basa su pretensión y cada parte debe soportar el cargo de la prueba respecto de los hechos que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).

En el punto, el artículo 377 del CPCC, de aplicación al caso, disponía que “Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción...”

En su comentario a la norma, el Profesor Osvaldo Gozaíni, explica que “...la disposición comentada centra sus proyecciones en dirección al actor, tanto como para que verifique los hechos afirmados o articulados, como para que pruebe el presupuesto de hecho que la norma requiere para producir una determinada consecuencia jurídica...” (Cf. Gozaíni, Osvaldo A. La prueba en el proceso civil de Río Negro. 1ra edición Bariloche. Sello Editorial Patagonia, 2015. Pág. 250).

Entonces, el análisis de los elementos de convicción reseñados precedentemente me lleva a coincidir con el magistrado de grado, en cuanto a que la actora no ha demostrado fehacientemente el hundimiento de la embarcación, y por vía de hipótesis aun cuando se soslayara dicho extremo, que el mismo hubiese ocurrido por la causa que invoca, es decir que la causa del hundimiento de la embarcación obedeció al ingreso de agua generado por el despegue de un tubo y que esto sucedió por un trabajo defectuoso realizado por los demandados.

Llegado ese extremo, ha sido acreditado en autos, y también abordado por el juez de grado, que si también hipotéticamente la causa del hundimiento hubiese sido la avería de los pontones (la deficiencia en su pegado), dicha circunstancia era conocida por el Sr. Carlos Cimadevilla, con anterioridad al evento que diera origen a la pretensión contenida en las actuaciones (Cf. Mensaje de whatsapp de fecha 18-12-2019, verificado mediante la prueba pericial informática).

Que lo expuesto resulta suficiente para sostener el rechazo de los agravios formulados.

VI.2. Apelación de honorarios.

VI.2.1. En primer término trataré la apelación deducida y fundada por la letrada patrocinante de la demandada el 16/03/2025 (presentación E0098), por los honorarios profesionales que le regularan en la sentencia de fecha 05/03/2025, concedida en los términos del art. 222 del CPCC., cuyo traslado fue incontestado.

En relación al primer planteo que formula, entiendo que le asiste razón a la apelante toda vez que en la sentencia recurrida al regular sus honorarios profesionales

debió tomar como monto base de la regulación el capital más el interés, tal como lo establece la doctrina del Superior Tribunal de Justicia en los autos caratulados: "REBATTINI, RODOLFO ANIBAL C/RITTER, HUBERT OTTO Y OTRAS/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ORDINARIO) S/CASACION" (Expte. N° BA-10155- C-0000). En dicho precedente el STJR dispuso que: "... La accesoriedad de los intereses respecto al capital es otro fundamento de peso para su inclusión en el monto base: en este sendero, se ha dicho que "ante el rechazo de la demanda y a los fines de la regulación de honorarios profesionales debe computarse como monto del proceso el valor íntegro de aquélla, aplicando analógicamente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida. De ahí que corresponde tener en cuenta el monto cuantificado en el escrito de demanda, al que deben incluirse los intereses reclamados, en tanto el principio según el cual los réditos son accesorios y por ende meros resultados de una contingencia variable, no se diferencia esencialmente de la repotenciación monetaria expresamente prevista por el art. 22 de la ley 21.839" (CNCiv. Sala A; "Banco Río de La Plata S.A. c/Muro Guillermo Jorge s/ ejecución hipotecaria", 12-04-07). En igual sentido en relación a la accesoriedad y en postura que comparto, este Cuerpo destacó en "Luprod" ya citado y en evidente alusión a la postura mayoritaria en "Morete" que "resulta sumamente complejo deslindar en el análisis del trabajo profesional, el esfuerzo dedicado con exclusividad al ítem intereses, sin considerar el capital subyacente. Por lo general, las acciones del abogado afectan tanto al capital como a los intereses asociados, ya que estos últimos funcionan como accesorios del primero. Los intereses no mudan su naturaleza en función de la suerte de la pretensión; siempre actúan como accesorios y se suman para indicar el valor económico en disputa. De hecho, su función de compensación por morosidad adquiere aun mayor relevancia en el actual escenario macroeconómico".

Por lo tanto corresponde hacer lugar al agravio de la recurrente en este punto, dejándose sin efecto la regulación efectuada y ordenarse que en la instancia de origen se efectúe una nueva regulación de sus honorarios profesionales por su labor en aquella instancia, en el carácter de letrada patrocinante de la demandada, tomando como monto base de la regulación el capital reclamado con más sus intereses.

Respecto a la apelación de los honorarios por bajos (18% aplicado al monto base), considero que la misma debe desestimarse toda vez que la apreciación del mérito profesional a los fines regulatorios es en principio de la órbita del juez de grado, quien

mejor conoce y ha percibido la labor profesional. Ello, claramente sin perjuicio de que de advertirse error o discrecionalidad excesiva pueda revisarse lo resuelto, situación que no se configura en este caso.

VI.2.2. Respecto a la apelación deducida por la parte actora el 19/05/2025 (presentación E0102) por los honorarios profesionales que le regularan en la sentencia aclaratoria de fecha 06/05/2025 al perito Aldo Capitán, por considerarlo altos, cabe tener por reproducidos los argumentos expuestos para el rechazo de la apelación efectuada por la abogada patrocinante de la parte accionada. En tal sentido la apreciación del mérito profesional a los fines regulatorios es en principio de la órbita del juez de grado, quien mejor conoce y ha percibido la labor profesional. Y en el caso tampoco se advierte un error o discrecionalidad excesiva pueda brindar sustento para revisarse lo resuelto.

Así entonces, no se encuentra en la apelación presentada ningún argumento que permita considerar altos los honorarios regulados al perito Aldo Capitán, entonces, de modo que la apelación de la actora debe ser desestimada.

VII. Que las costas de esta segunda instancia deben imponerse a la actora vencida por no existir razones para soslayar el principio objetivo de la derrota (artículo 62 del CPCC).

VIII. Los honorarios de segunda instancia del Dr. Pablo Devoto y Jorge Luis Olguin, por un lado (letrados apoderados de la actora) y los de la Dra. Silvina Cohen Arazi, por otro (letrada patrocinante de la demandada), deben regularse respectivamente en el 30 % de lo regulado a cada uno por los trabajos de primera instancia, de acuerdo con la naturaleza, la complejidad, la duración y la trascendencia del asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión (artículo 6, LA.); todo lo cual justifica las proporciones indicadas (artículo 15, ley citada).

IX. Por las razones dadas, de compartirse mi criterio, propongo:

Primero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, y confirmarse la sentencia recurrida. Segundo: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Dra. Silvina Cohen Arazi, respecto de los honorarios regulados por su actuación como letrada patrocinante de la accionada en primera instancia, y en

consecuencia ordenarse que en la instancia de origen se efectúe una nueva regulación de sus honorarios profesionales por su labor en aquella instancia, en el carácter de letrada patrocinante de la demandada, tomando como monto base de la regulación el capital reclamado con más sus intereses. Tercero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora respecto de los honorarios regulados al perito Aldo Capitán. Cuarto: Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (Art. 62 C.P.C.C.). Quinto: Regular los honorarios de segunda instancia del Dr. Pablo Devoto y Jorge Luis Olgún, por un lado (letrados apoderados de la actora) y los de la Dra. Silvina Cohen Arazi, por otro (letrada patrocinante de la demandada), en el 30 % de lo regulado a cada uno por los trabajos de primera instancia, de acuerdo con la naturaleza, la complejidad, la duración y la trascendencia del asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión (artículo 6, LA.); todo lo cual justifica las proporciones indicadas (artículo 15, ley citada). Sexto: Hacer saber que la presente se protocoliza y notifica en los términos del art. 120 del CPCC. Séptimo: Devolver oportunamente las actuaciones.

A la misma cuestión, la Dra. PAJARO dijo:

Por compartir lo sustancial de sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Corsiglia.

A igual cuestión, el Dr. RIAT dijo:

Ante la coincidencia precedente, me abstengo de opinar (artículo 242 del CPCC).

Por ello, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa,

RESUELVE:

Primero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, y confirmarse la sentencia recurrida.

Segundo: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Dra. Silvina Cohen Arazi, respecto de los honorarios regulados por su actuación como letrada patrocinante de la accionada en primera instancia, y en consecuencia ordenarse que en la instancia de origen se efectúe una nueva regulación de sus honorarios profesionales por su labor en aquella instancia, en el carácter de letrada patrocinante de la demandada, tomando como monto base de la regulación el capital reclamado con más sus intereses.

Tercero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora respecto de los honorarios regulados al perito Aldo Capitán.

Cuarto: Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (Art. 62 C.P.C.C.).

Quinto: Regular los honorarios de segunda instancia del Dr. Pablo Devoto y Jorge Luis Olguín, por un lado (letrados apoderados de la actora) y los de la Dra. Silvina Cohen Arazi, por otro (letrada patrocinante de la demandada), en el 30 % de lo regulado a cada uno por los trabajos de primera instancia, de acuerdo con la naturaleza, la complejidad, la duración y la trascendencia del asunto, con el resultado obtenido, y con el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión (artículo 6, LA.); todo lo cual justifica las proporciones indicadas (artículo 15, ley citada).

Sexto: Hacer saber que la presente se protocoliza y notifica en los términos del art. 120 del CPCC.

Séptimo: Devolver oportunamente las actuaciones.